



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO  
SECRETARIA**

**ESTADOS DE 17 DE MAYO DE 2022**

**LOS AUTOS PROFERIDOS DENTRO DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CUADRO DE ESTADOS, SE ADJUNTAN A ESTE DOCUMENTO.**

**MAGISTRADA PONENTE, DRA. ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA.**

	<b>No RAD</b>	<b>MEDIO DE CONTROL</b>	<b>PARTES</b>	<b>PROVIDENCIA</b>
<b>1</b>	2022-00159	CIL	Demandante: Municipio de Cuaspud Carlosama (N) Acto administrativo: Decreto 038 de 6 de mayo de 2022	NO AVOCAR, para control inmediato de legalidad, el Decreto No 038 de 6 de mayo de 2022, proferido por el Alcalde del Municipio de Cuaspud Carlosama (N), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
<b>2</b>	2019-00130 (11405)	NRD	Demandante: Lilia Doris Gómez Enríquez Demandado: Municipio de Pasto	Conceder el amparo de pobreza a la señora Lilia Doris Gómez Enríquez.
<b>3</b>	2017-00038 (11453)	RD	Demandante: Diego Fernando Ortega García y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional	Auto admite recurso de apelación (Artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021)
<b>4</b>	2021-00367 (11460)	RD	Demandante: Hermenegildo de la Cruz Rodríguez Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional	Auto admite recurso de apelación (Artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021)
<b>5</b>	2019-00170 (11495)	NRD	Demandante: Claudia Patricia Guerrero Meza y otro Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo	Auto admite recurso de apelación (Artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021)



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO  
Sala Unitaria**

Pasto, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

**Radicación:** 520012333000 2022-00159 00  
**Medio de control:** Control inmediato de Legalidad  
**Demandante:** Municipio de Cuaspud Carlosama (N)  
**Acto administrativo:** Decreto 038 de 6 de mayo de 2022

**Magistrada:** Ana Beel Bastidas Pantoja

Le correspondió a este despacho el conocimiento del control inmediato de legalidad del Decreto No 038 de 6 de mayo de 2022 ***“Por medio del cual se declara urgencia manifiesta en el municipio de Cuaspud Carlosama (N)”*** expedido por el Alcalde del Municipio de Cuaspud Carlosama (N).

Corresponde a la Sala resolver sobre su admisión, previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

El artículo 215 de la Constitución Política, autoriza al Presidente de la República declarar el Estado de Emergencia cuando se presenten circunstancias distintas a las previstas en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, ecológico del país, o constituyan grave calamidad pública.

Con fundamento en lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley 137 de 1994 *“Ley Estatutaria de los Estados de Excepción”*, precisando en su artículo 20 que *“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades*

nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.” En ese mismo sentido fue desarrollado por el artículo 136<sup>1</sup> de la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, en única instancia los Tribunales Administrativos conocerán del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.

De la revisión del presente asunto, encuentra el despacho que el acto administrativo sometido a control no se profirió en desarrollo de un decreto legislativo expedido con ocasión de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional.

Adicionalmente, se observa que la urgencia manifiesta declarada por el Municipio de Cuaspud Carlosama, obedeció a la facultad legal prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993; dicha normatividad expresamente señala lo siguiente: **“ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.**

**La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.”.**

Así las cosas, encuentra el despacho que el Decreto objeto de control inmediato de legalidad, tuvo como fundamento principal las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley a la primera autoridad del municipio, y no se corresponde con un acto administrativo que desarrolle un decreto legislativo expedido por el Presidente, en virtud de un estado de excepción.

---

<sup>1</sup> **ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD.** Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.

En tal virtud, no resulta procedente en este caso adelantar el control inmediato de legalidad del citado Decreto Municipal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, en razón por la cual no se avocará el conocimiento en el asunto de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño,

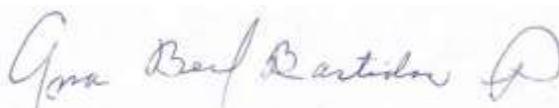
## **R E S U E L V E**

**PRIMERO: NO AVOCAR**, para control inmediato de legalidad, el Decreto No 038 de 6 de mayo de 2022, proferido por el Alcalde del Municipio de Cuaspud Carlosama (N), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** la presente decisión por estados electrónicos y a los correos electrónicos del Municipio de Cuaspud Carlosama y el Ministerio Público, destinados para tal finalidad.

**TERCERO:** Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente

## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA**

**Magistrada**



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO  
Sala Unitaria de Decisión**

Pasto, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

**Expediente:** 520013333007 2019-00130 (11405)  
**Medio de control:** Nulidad y restablecimiento del derecho  
**Demandante:** Lilia Doris Gómez Enríquez  
**Demandado:** Municipio de Pasto  
**Legislación:** Ley 2080 de 2021

**Magistrada Ponente:** Ana Beel Bastidas Pantoja

Procede Sala a resolver la solicitud de amparo de pobreza presentada por la demandante.

**DE LA SOLICITUD DE AMPARO DE POBREZA:**

En el archivo 054 del expediente electrónico obra solicitud suscrita por la demandante, señora Lilia Doris Gómez Enríquez, mediante la cual, bajo la gravedad del juramento solicita le sea concedido amparo de pobreza. Su petición la sustentó en los siguientes términos: *“(...) en la actualidad mis ingresos únicamente alcanzan para mi subsistencia y la de mi hijo quien se encuentra en una situación de discapacidad, carezco de capacidad económica para continuar con el proceso de la referencia y ejercer los derechos constitucionales y legales, sin menoscabo de lo necesario para mi propia subsistencia y de las personas a mi cargo. Sin embargo, esto no implica que no pueda acudir a la justicia para defensa de mis derechos, porque precisamente este Instituto Procesal es coherente con el desarrollo del principio procesal de la igualdad de las partes en el proceso”.*

### CONSIDERACIONES:

El amparo de pobreza se encuentra regulado en los artículos 151 y siguientes del CGP<sup>1</sup>; sobre su procedencia, oportunidad y requisitos, dicha normatividad, en lo pertinente, prevé lo siguiente:

**“Artículo 151. Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.**

**Artículo 152. Oportunidad, competencia y requisitos. El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.**

**El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.**

**Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso, que actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando este acepte el encargo”.** (Subrayado fuera de texto).

Conforme a las normas transcritas se concluye que el amparo de pobreza es un beneficio de tipo legal, que tiene el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia de aquellos sujetos procesales que, por su incapacidad para asumir los costos del proceso, son eximidos de ello.

En cuanto a la oportunidad para presentar la solicitud de amparo de pobreza, el artículo 152 del CGP dispone que la misma podrá formularse antes de la

---

<sup>1</sup> Normatividad aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del CPACA

presentación de la demanda o en cualquier oportunidad dentro del curso del proceso y, que en tratándose de las personas demandadas o llamadas a comparecer al proceso, su oportunidad está dada con la contestación de la demanda o igualmente durante cualquier etapa procesal.

Finalmente, la normatividad transcrita señala como requisito para que proceda la solicitud de amparo de pobreza, la afirmación bajo la gravedad del juramento que carece de los medios necesarios para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos.

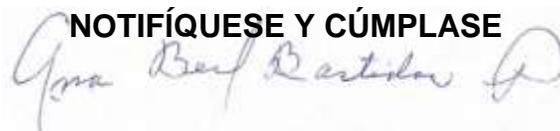
En el sub examine se observa que la demandante cumple con el requisito exigido en la norma transcrita para acceder al amparo de pobreza, en tanto ha manifestado bajo la gravedad del juramento, que su condición económica no le permite continuar cubriendo los gastos del proceso, dado a que en la actualidad sus ingresos alcanzan únicamente para solventar sus propios gastos y los de su hijo discapacitado.

Con base en las normas en cita y los elementos fácticos expuestos, se concederá el amparo de pobreza en favor de la señora Lilia Doris Gómez Enríquez.

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,

**RESUELVE**

**PRIMERO: Conceder** el amparo de pobreza a la señora **Lilia Doris Gómez Enríquez**.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**  


**ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA**

**Magistrada**



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO  
Sala Unitaria**

Pasto, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

**Radicación:** 520013333002 2017-00038 (11453)  
**Medio de control:** Reparación directa  
**Demandante:** Diego Fernando Ortega García y otros  
**Demandado:** Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional  
**Legislación:** Ley 2080 de 2021  
**Magistrada ponente:** Ana Beel Bastidas Pantoja

Por reunir los requisitos mínimos legales y según lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021, se admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 7 de marzo de 2022.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Admitir el recurso de apelación.

**SEGUNDO:** Notificar a la señora Agente del Ministerio Público y a las partes al correo electrónico dispuesto para ello.

**TERCERO:** El numeral 5º del artículo 247 del CPACA, modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto al trámite en segunda instancia, del recurso de apelación contra sentencias, dispone: ***“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”***. En consecuencia, si dentro del término de ejecutoria del presente auto, las partes no solicitan pruebas, el expediente pasará al despacho para sentencia.

**CUARTO:** De conformidad con el numeral 6º del artículo 247 del CPACA, modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021, el Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.

**QUINTO:** Cumplido lo anterior, secretaría dará cuenta al despacho para proferir sentencia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA**

**Magistrada**



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO  
Sala Unitaria**

Pasto, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

**Radicación:** 528353331001 2021-00367 (11460)  
**Medio de control:** Reparación directa  
**Demandante:** Hermenegildo de la Cruz Rodríguez  
**Demandado:** Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional  
**Legislación:** Ley 2080 de 2021  
**Magistrada ponente:** Ana Beel Bastidas Pantoja

Por reunir los requisitos mínimos legales y según lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021, se admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 11 de marzo de 2022.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Admitir el recurso de apelación.

**SEGUNDO:** Notificar a la señora Agente del Ministerio Público y a las partes al correo electrónico dispuesto para ello.

**TERCERO:** El numeral 5º del artículo 247 del CPACA, modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto al trámite en segunda instancia, del recurso de apelación contra sentencias, dispone: ***“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”***. En consecuencia, si dentro del término de ejecutoria del presente auto, las partes no solicitan pruebas, el expediente pasará al despacho para sentencia.

**CUARTO:** De conformidad con el numeral 6º del artículo 247 del CPACA, modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021, el Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.

**QUINTO:** Cumplido lo anterior, secretaría dará cuenta al despacho para proferir sentencia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA**

**Magistrada**



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO  
Sala Unitaria**

Pasto, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

**Radicación:** 520013333033 2019-00170 (11495)  
**Medio de control:** Nulidad y restablecimiento del derecho  
**Demandante:** Claudia Patricia Guerrero Meza y otro  
**Demandado:** Nación – Ministerio del Trabajo  
**Legislación:** Ley 2080 de 2021  
**Magistrada ponente:** Ana Beel Bastidas Pantoja

Por reunir los requisitos mínimos legales y según lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021, se admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 4 de abril de 2022.

Frente a la prueba documental a que hace referencia la parte demandante, en la página 8 del archivo 060 del expediente electrónico, esta Sala advierte que el artículo 212 del CPACA consagró el término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación como la oportunidad para solicitar pruebas en segunda instancia, por consiguiente, en esta fase procesal la parte demandante puede realizar la solicitud probatoria respectiva para ser analizada por esta Corporación.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Admitir el recurso de apelación.

**SEGUNDO:** Notificar a la señora Agente del Ministerio Público y a las partes al correo electrónico dispuesto para ello.

**TERCERO:** El numeral 5º del artículo 247 del CPACA, modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto al trámite en segunda instancia, del recurso de apelación contra sentencias, dispone: ***“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”***. En consecuencia, si dentro del término de ejecutoria del presente auto, las partes no solicitan pruebas, el expediente pasará al despacho para sentencia.

**CUARTO:** De conformidad con el numeral 6º del artículo 247 del CPACA, modificado por el Art. 67 de la Ley 2080 de 2021, el Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.

**QUINTO:** Cumplido lo anterior, secretaría dará cuenta al despacho para proferir sentencia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ANA BEEL BASTIDAS PANTOJA**

**Magistrada**